



Asamblea General

Distr. general
3 de septiembre de 2012

Español solamente

Consejo de Derechos Humanos

21º período de sesiones

Tema 3 del programa

**Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales, incluido
el derecho al desarrollo**

Exposición escrita* presentada por los Permanent Assembly for Human Rights, organización no gubernamental reconocida como entidad consultiva especial

El Secretario General ha recibido la siguiente exposición por escrito que se distribuye con arreglo a la resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social.

[23 de agosto de 2012]

* Se distribuye esta exposición escrita sin editar, en los idiomas tal como ha sido recibida de la organización no gubernamental.

Empresas de seguridad y mercenarios

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) expresa su preocupación por la actuación de las compañías privadas militares en tiempo de guerra. En cualquier parte del mundo donde se desencadenan conflictos armados, observamos un aumento en las intervenciones por parte de estas empresas privadas, realizando trabajos que van desde la participación directa en los conflictos hasta la prestación de servicios de seguridad y logística.

Desde el fin de la Guerra Fría, las prácticas de tercerización (outsourcing) se desarrollaron rápidamente en el seno de las fuerzas armadas, especialmente en los Estados Unidos, bajo el efecto conjunto de la globalización del sector militar-industrial, de la reducción de armamentos y de las exigencias de recortes en los presupuestos de defensa. Forma avanzada de la subcontratación, para volúmenes financieros importantes y que implican un reparto de riesgos entre el Estado y la industria privada, la tercerización es ante todo una aplicación de los métodos de la nueva gestión del Estado conforme a los lineamientos de las políticas liberales de privatización.

El conflicto armado en Irak pone claramente en evidencia que estos actores privados, presentes durante las fases esenciales de la guerra y la posguerra, cumplen funciones indispensables al ejercicio de fuerza por parte de la potencia estadounidense. La proliferación de los mercenarios en Irak es el resultado de una política deliberada, que busca experimentar nuevas formas de intervención, esta situación cambia profundamente los equilibrios cívico-militares y políticos tradicionales en las sociedades que emergen de períodos de crisis, pero también los cambia en las sociedades occidentales. Al mezclar las categorías tradicionales: civil/militar y privado/público, esos actores híbridos trabajan a menudo con redes informales que favorecen la corrupción y la criminalidad.

El Estado cuenta con el monopolio legítimo de la fuerza, por lo cual, debe ser el único actor capaz de actuar en temas tan sensibles como la seguridad y la defensa. Desde la APDH consideramos peligrosa la delegación del poder militar y de seguridad a empresas privadas, ya que estos no cuentan con el aval del voto popular, ni con la posibilidad de control por parte de la sociedad.

La APDH solicita a los Estados a tomar las medidas necesarias para erradicar a estas compañías militares y de seguridad privada, para que los Estados vuelvan a contar con el absoluto monopolio de la fuerza.

Por otro lado, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) expresa su preocupación frente al constante aumento de reclutas en América Latina para desempeñarse como mercenarios en misiones en Afganistán, Iraq, Sudán, Congo y otras regiones en conflicto. La contratación de “mano de obra barata” en América Latina por parte de las empresas militares y de seguridad privada, procedente de los países desarrollados, responde a una lógica comercial que busca como fin último la mayor rentabilidad económica, olvidando los derechos fundamentales.

Estas compañías militares y de seguridad privada reclutan a personas (civiles, ex militares o ex policías) en países con altos índices de desempleo y de precarización del trabajos, situación afable para la captación de personas más vulnerables a aceptar por sueldos magros prestar servicios en zonas de conflicto armado. Los trabajos que desempeñan van desde guardias de seguridad en embajadas o aeropuertos hasta combatientes en el frente de batalla. Respecto de América Latina nos preocupa la cantidad de personas que estas empresas reclutan en Colombia, Honduras, El Salvador, Perú, Chile y Brasil.

La “privatización de la guerra” fue una de las tantas consecuencias luego de los atentados del 11 de septiembre del 2001 y las consiguientes invasiones a Irak y Afganistán. El miedo, producto de la coyuntura política y social, consolidó una industria de seguridad que favoreció, sobre todo, a las Compañías Militares y de Seguridad Privadas. Estas se han ocupado de “legalizar” el negocio de los mercenarios, a través de registros legales en sus países de origen, y de la obtención de contratos, sobre todo de los Estados Unidos y del Reino Unido. En América Latina empresas como la Triple Cannopy y Blackwater (dos de las mayores reclutadoras de mano de obra latinoamericana) subcontratan a otras empresas para que realicen las contrataciones de los reclutas y de esta forma no ser directamente responsables sobre estas personas.

A nivel internacional podemos observar la falta de legislación que dé cuenta de este nuevo fenómeno. Estamos ante una nueva forma de mercenarismo. Los Estados contratan Compañías Militares Privadas para que éstas a su vez recluten mercenarios en terceros países para defender sus intereses. Los mercenarios están exentos de las normas del derecho internacional humanitario y cuentan además con inmunidad diplomática, es decir, no pueden ser juzgados por ningún delito en los territorios de los países donde se encuentran trabajando.

La APDH solicita a los Estados que tomen las medidas necesarias para erradicar esta práctica. Asimismo, constatamos la necesidad de dotar a la Corte Penal Internacional, y al derecho internacional de las herramientas prevenir y juzgar a quienes recluten, utilicen, financien y entrenen mercenarios.
